



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

**AMPARO DIRECTO: 43/2013.**

**MATERIA: LABORAL.**

**QUEJOSO:** [REDACTED]

**PONENTE:**

**MAGISTRADO JOSÉ DE JESÚS LÓPEZ ARIAS.**

**SECRETARIO:**

**LIC. GABRIEL ARÉVALO MASCAREÑO.**



AL COLEGIADO  
DE TRABAJO  
TERCER CIRCUITO  
V. JAL

Zapopan, Jalisco, acuerdo del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, correspondiente a la sesión del siete de marzo de dos mil trece.

**V I S T O S**, para resolver el juicio de amparo directo número 43/2013; y,

I

**RESULTANDO:**

**PRIMERO.** Por escrito presentado el **cinco de septiembre de dos mil doce** ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, recibido el dieciséis de enero de dos mil trece en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, y a su vez remitido al día hábil siguiente por razón de turno [**diecisiete de enero de dos mil trece**] a este Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el [REDACTED] [REDACTED] por conducto de su apoderado general judicial [REDACTED] solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el **Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco** por los actos que a continuación se transcriben:

***“ACTO RECLAMADO.- Lo constituye: el laudo definitivo dictado con fecha 23 de julio de 2012, en el expediente al rubro indicado, notificado el día 17 de agosto de 2012; que a la letra señala en sus puntos resolutivos: - - - “PRIMERA.- La parte actora C. [REDACTED] probó su acción y la demandada [REDACTED]***





[REDACTED] no acreditó sus excepciones, en consecuencia:" - - - "SEGUNDA.-

Se declara nulo el oficio DP/132/2010, de fecha 09 de julio de 2010, suscrito por el [REDACTED]

[REDACTED] en su carácter de Director de [REDACTED]

[REDACTED] condenándose a la demandada ... a turnar la solicitud de la parte actora al Consejo Directivo para que conforme al numeral antes citado determine lo conducente, conforme a lo razonado en el cuerpo de la presente resolución."

- - - Por su parte, el "cuerpo" de la resolución determina, en sus fojas 9, 10 y 11 que se reconoce el "derecho" de la actora a reintegrar la aportaciones (sic) que retiró voluntariamente y a su solicitud desde el año de 1979; "fundamentándolo" en el principio general de derecho que establece que para los particulares lo que no está prohibido está permitido".

SEGUNDO. El diecisiete de enero de dos mil trece, se recibió en la Oficialía de Partes de este Tribunal el oficio



MB1/004/2013 suscrito por el Secretario General del Tribunal responsable, mediante el cual remite los autos originales del juicio laboral **130/2011-B** de su índice, así como un sobre de pruebas, cuyas constancias acreditan la certeza de los actos reclamados (foja 2 del sumario)

**TERCERO.** El diecisiete de enero de dos mil trece, el Presidente de este Tribunal, **admitió** la demanda de amparo directo que se registró con el número **43/2013**; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención legal que le compete, mediante oficio 435; quien formuló pedimento número 42; y se tuvo como tercero perjudicado a [REDACTED]

[REDACTED] (fojas 27 a 41 del sumario constitucional).

**CUARTO.** El veintinueve de enero de dos mil trece, se dictó auto en el que se turnaron los autos del juicio de amparo directo que ocupa la atención de este Tribunal al **Magistrado José de Jesús López Arias**, con la finalidad de formular el proyecto correspondiente (foja 44 del sumario constitucional), y

## II

### CONSIDERANDO:





**PRIMERO. Competencia.** Este Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo directo, conforme a lo dispuesto por los preceptos 103 fracción I, 107 fracciones V, inciso d), y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, 46, párrafo primero, 158 de la Ley de Amparo; 37, fracción I, inciso d) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asimismo, en términos de los puntos primero fracción III, segundo fracción III, numeral 1 y tercero fracción III, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; ya que se reclama un laudo pronunciado por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, el cual reside dentro de la demarcación



territorial sobre el que ejerce jurisdicción este órgano colegiado.

**SEGUNDO. Certeza del Acto Reclamado.** Para resolver el caso en examen, se hace necesario atender a la certeza o inexistencia de los actos reclamados; luego, lo aleguen o no las partes, de ser los actos existentes se estudiarán las causas de improcedencia advertidas de oficio y/o propuestas por los interesados, para después, de encontrar que el juicio de amparo es procedente, se estudiará el fondo del asunto<sup>1</sup>, tal y como lo señala la siguiente jurisprudencia:

**“ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO.** *El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la*

<sup>1</sup> Citase al respecto la tesis de jurisprudencia XVII.20. J/10 de rubro: Registro **212775**, Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 76, abril de 1994, página 68.







*sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A*



*mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa*





*de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento”.*

Debe puntualizarse que es cierto el acto que se reclama al Tribunal responsable, toda vez que así se corrobora con el examen integral de las actuaciones originales que conforman el expediente laboral [REDACTED] que la propia responsable acompañó al informe y del cual se advierte el laudo reclamado de veintitrés de julio de dos mil doce.

**TERCERO. Oportunidad de la demanda.** El presente juicio constitucional fue promovido dentro del término de quince días establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo.

En efecto, la notificación de la resolución que constituye el acto reclamado se realizó a la parte quejosa el diecisiete de agosto de dos mil doce, tal y como se evidencia del acta de notificación que obra a foja 148 del

expediente laboral de origen; por tanto, dicha notificación surtió sus efectos legales el mismo día de conformidad con lo dispuesto en el artículo 747, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo; en consecuencia, el plazo de quince días al que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo, transcurrió del veinte de agosto al siete de septiembre de dos mil doce, una vez que se descontaron del cómputo respectivo los días dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de agosto, así como uno y dos de septiembre de dos mil doce, por haber correspondido a sábados y domingos.

Por consiguiente, si la demanda de amparo se presentó ante la responsable, el cinco de septiembre de dos mil doce, es incontrovertible que fue promovida oportunamente.

**CUARTO. No transcripción de los conceptos de violación ni del laudo reclamado.** Se tiene por reproducido el laudo reclamado, del que se ordena agregar copia certificada a los presentes autos, e igualmente se dan por transcritos los conceptos de violación hechos valer en su contra, sin que para ello resulte necesaria su







transcripción, dado que el artículo 77 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos que deben contener las sentencias no lo prevé así, ni existe precepto legal alguno que establezca esa obligación a cargo de este Tribunal Colegiado de Circuito; además de que no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, pues para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo, resulta innecesaria su transcripción, pues tales principios se satisfacen cuando se precisan los puntos a debate, derivados de la demanda de amparo, los cuales deben ser estudiados y dárseles respuesta, misma que debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad y constitucionalidad, planteados en el libelo relativo, sin introducir aspectos diversos a los que conforman la litis constitucional.

Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 50/2010, localizable en la página ochocientos treinta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez,

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:

***“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X “De las sentencias”, del título primero “Reglas Generales”, del libro primero “Del amparo en general”, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego***







*correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer”.*

Asimismo, resulta aplicable por identidad jurídica sustancial, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, cuyo criterio se comparte, visible en la página 2115, del Tomo XXIII, Marzo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:

**“SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AL EMITIRLAS NO SE ENCUENTRAN OBLIGADOS A TRANSCRIBIR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA. El hecho de que en las sentencias que emitan los Tribunales Colegiados**



***de Circuito no se transcriba la resolución recurrida, no infringe disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual quedan sujetas sus actuaciones, pues el artículo 77 de dicha legislación, que establece los requisitos que deben contener las sentencias, no lo prevé así, ni existe precepto alguno que establezca esa obligación; además, dicha omisión no deja en estado de indefensión al recurrente, puesto que ese fallo obra en los autos y se toma en cuenta al resolver”.***

**QUINTO. Estudio del fondo del asunto.** Una vez delimitado lo anterior, es conveniente precisar que el juicio de amparo es promovido por el Instituto demandado en el juicio laboral de origen y, por ende, opera el principio de estricto derecho, razón por la cual, la constitucionalidad del laudo reclamado se examinará a la luz, exclusivamente, de lo argumentado en los conceptos de violación, porque son éstos, en el caso, los que proporcionan la dimensión y materia del estudio en el presente juicio constitucional.

Ello, dado que la suplencia de la deficiencia de la queja en términos de la fracción IV, del artículo 76 bis de la

CUARTO TRIBUNAL  
EN MATERIA DE  
DEL TERCER  
2013



Ley de Amparo, exclusivamente opera a favor de los sujetos de la clase trabajadora como lo ha establecido el Alto Tribunal al realizar su interpretación gramatical, histórica, sistemática y finalista de esta disposición.

En ese sentido es ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 42/97,<sup>2</sup> de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone en su rubro: ***“SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN FAVOR DE LA PARTE PATRONAL, IMPROCEDENCIA DE LA”***.

En este sentido, se tiene que los conceptos de violación resultan **inoperantes** por insuficientes, para efectos de conceder el amparo al impetrante, cuyo análisis se realizará en forma conjunta, por así permitirlo el artículo 79 de la Ley de Amparo.

Al respecto se comparte la tesis de jurisprudencia VI.2o.C. J/304 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial

<sup>2</sup> Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, septiembre de 1997, página 305.

de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Febrero de 2009, visible en la página 1677, que dice:

***“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 79 de la Ley de Amparo previene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito pueden realizar el examen conjunto de los conceptos de violación o agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero no impone la obligación al juzgador de garantías de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente en su escrito de inconformidad, sino que la única condición que establece el referido precepto es que se analicen todos los puntos materia de debate, lo cual puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso”.***







En este sentido, con el objeto de facilitar la comprensión del asunto y de paso sentar las bases sobre las cuales se desarrollará el presente estudio, es necesario efectuar una breve reseña de los principales antecedentes que se desprenden de las constancias que integran el expediente laboral [REDACTED] del índice de la responsable, a las cuales se otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo como ésta lo previene en su artículo 2, cuyo examen revela lo siguiente:

(a) El **primero de octubre de dos mil diez**,

[REDACTED] presentó escrito de demanda ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, la cual fue turnada a la Primera Sala Unitaria del citado órgano contencioso administrativo, en el que demandó de [REDACTED] en su carácter de [REDACTED]

[REDACTED] lo siguiente (fojas 1 a 14 del expediente laboral de origen):

- La nulidad lisa y llana del oficio DP/132/2010 por carecer de fundamentación y motivación, así como porque la autoridad que lo emitió resultaba incompetente; y para el efecto de que:
- Se admitiera la devolución de las aportaciones de la hoy tercero perjudicada y se reconociera por el Instituto quejoso la antigüedad y por ende el otorgamiento de la pensión por jubilación.

(b) El **siete de octubre del dos mil diez**, se dictó auto por la Primera Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, en el que admitió la demanda presentada por la hoy tercera perjudicada, así como todas las pruebas ofrecidas por ella; ordenando correr traslado a la autoridad demandada para que realizara la contestación a la demanda (fojas 28 y 29 del expediente juicio laboral).

CUARTO TRIBUNAL  
EN MATERIA DE  
DEL TERCER  
CIRCUITO

(c) El **cinco de noviembre del año dos mil diez**, el Tribunal de lo Administrativo tuvo a [REDACTED]

[REDACTED] en su carácter de [REDACTED]

[REDACTED] quejoso dando contestación a la demanda, admitiéndosele las pruebas ofrecidas por su parte;



asimismo, se puso a la vista de las partes con el propósito de que emitieran sus alegatos (fojas 54 y 55 del expediente del juicio laboral).

(d) El **trece de diciembre del año dos mil diez**, la Primera Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco dictó resolución en la que sobreseyó el juicio contencioso administrativo de referencia, se declaró incompetente y ordenó remitir los autos al Tribunal de Arbitraje y Escalafón responsable (fojas 79 a 86 del expediente del juicio laboral)

(e) El **diecisiete de junio del año dos mil once**, con motivo de la remisión de los autos al Tribunal responsable, este admitió la demanda, registrándola con el número [REDACTED] (fojas 90 y 91 del expediente del juicio laboral).

(f) El **veintinueve de agosto de dos mil once**, se procedió a la celebración de la Audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, Ofrecimiento y Admisión de Pruebas, la cual se suspendió, en virtud de que la parte actora amplió su demanda de conformidad con el escrito que obra a foja 113 del expediente de



origen. Asimismo, en la referida audiencia al tener la palabra la actora hoy tercero perjudicada, señaló: (fojas 114 y 115 del expediente del juicio laboral).

*“Que en este acto previo a ratificar mi demanda, se aclara, modifica y se amplía lo que se hace mediante una foja útil por una sola de sus caras, además de manera verbal amplió el sentido de que del documento donde dice la demandada firmé de recibido mi fondo de ahorros no es mi firma, lo que se demostrará en el momento procesal oportuno, hecho lo anterior ratifico mi demanda, mi escrito aclaratorio, y lo expresado aquí de manera verbal, reservándome el uso de la voz para mi derecho de réplica en caso de ser necesario, solicitando se suspenda la presente audiencia en virtud de que estoy modificando hechos sustanciales”.*

(g) El **seis de diciembre de dos mil once**, se tuvo al Instituto demandado dando contestación a la aclaración de demanda (foja 118 del expediente del juicio laboral).





(h) El **siete de marzo de dos mil doce**, se dio continuación a la Audiencia trifásica, en donde se concedió la palabra a la actora quien manifestó: *"En este acto mediante escrito que consta de cuatro fojas útiles por una sola de sus caras ofrezco los medios de prueba con los que se pretende acreditar lo argumentado en la contestación y las contestaciones a las ampliaciones a la demanda, pruebas que solicito se admitan por tener relación directa con la litis planteada y no ir en contra de la moral y el derecho así mismo solicito se tenga por desahogadas las que por su propia naturaleza así lo permitan haciendo referencia que en las documentales que se ofertan se anexan copias debidamente certificadas por Notario por lo cual solicito a esta Autoridad las coteje con los originales que se ofrecen para que me sean devueltos los originales presentados ante este Tribunal [...]"*

(i) Por su parte, la actora en relación al ofrecimiento de pruebas de la parte demandada manifestó: *"Que en este acto se objeta en cuanto a su contenido la documental número 4, en el sentido de que la firma que*

*calza dicho documento en el rubro del nombre de la actora se desconoce que haya sido estampada de su puño y letra y por ende también se desconoce el contenido de dicho documento, sin que se (sic) necesario ofrecer prueba pericial toda vez de que la parte demandada no contesto la ampliación respecto a la negación de la firma por lo tanto se le debe de tener aceptando como cierto el reclamo, por lo que en su momento no se le deberá de conceder ningún valor probatorio."*

(j) Y el demandado volvió a señalar: "Aun por ser el momento procesal oportuno y dadas las manifestaciones realizadas por el Apoderado Especial del actor del juicio se ofrece la prueba pericial caligráfica y grafoscópica a cargo un profesional en la materia a efecto de acreditar que la firma estampada en la prueba ofertada documental marcada con el número 4, fue estampada de su puño y letra por la actora para ello designo como Perito al Maestro [REDACTED] quien es perito en las áreas de grafoscopía y documentoscopia, teniendo el número de registro





MFRI270504-669, expedido por el Supremo Tribunal de Justicia, así como el registro 614, expedido por el H. Consejo de la Judicatura del Estado en las áreas de grafoscopia y documentoscopia mismo que cuenta con la cédula profesional federal 5090167, que lo acredita como Maestro en Derecho en Criminología [...].

(k) El ocho de marzo de dos mil doce, fecha que se señaló para el desahogo de las pruebas, la responsable se pronunció en cuanto a la prueba pericial de referencia, declarando: **“NO se admite y se rechaza la prueba PERICIAL CALIGRÁFICA Y GRAFOSCÓPICA**, respecto de la prueba documental marcada con el número 4 y ofertada por la propia demandada, toda vez que la misma no se propuso al momento de ofertar la documental 4, ya que si bien es cierto la demandada ofrece el medio de perfeccionamiento consistente en la ratificación de firma y contenido a cargo de la actora, **asimismo debió ofrecer en ese momento que para el caso de que la actora no reconozca como suya la firma contenida en dicha documental se ofrecerá la Prueba Pericial**, lo



*que en el caso nos ocupa no aconteció, por lo que tal probanza se encuentra ofertada fuera de tiempo, tal y como lo establece el numeral 880 fracción I de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la ley de la materia, ya que si bien es cierto la parte actora objetó la documental 4, no es menos cierto que la demandada es la oferente de dicha prueba, por lo que no es procedente su admisión, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 779 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo que se aplica supletoriamente a la Ley Burocrática Estatal [...]*

*[Lo resaltado es propio de este Tribunal]*



(I) El **veintisiete de marzo de dos mil doce** se

desahogó la prueba confesional a cargo de [REDACTED]

[REDACTED] donde negó que haya

suscrito el recibo de devolución de aportaciones y la

cantidad de \$ [REDACTED]

[REDACTED] que dijo el Instituto

demandado había recibido. Asimismo, la actora no

ratificó la firma ni el contenido de la documental ofrecida

bajo el número cuatro del escrito de ofrecimiento de



pruebas del Instituto demandado (fojas 138 y 139 del expediente del juicio laboral).

(m) El **veintitrés de julio de dos mil doce**, el Tribunal responsable dictó el laudo reclamado en donde se resolvió declarar nulo el oficio **DP/132/2010** de nueve de julio de dos mil diez suscrito por [REDACTED] [REDACTED] en su carácter de Director de Prestaciones del Instituto demandado, obligando además a este a turnar la solicitud de la parte actora al Consejo Directivo del [REDACTED] para que determinara lo conducente, conforme lo razonado en el cuerpo del laudo reclamado.

Ahora bien, como se dejó apuntado en el considerando Cuarto de este fallo, este órgano constitucional no tiene la obligación de hacer una transcripción de los conceptos de violación hechos valer en la demanda, sin embargo, se considera conveniente para un mejor entendimiento de la litis constitucional, realizar una síntesis de los conceptos de violación. Al respecto, la quejosa señala que se le violan los artículos



14 y 16 de la Constitución Federal, en razón de lo siguiente:

**PRIMER CONCEPTO DE VIOLACIÓN**

(i) Que en el juicio laboral existió controversia de hecho sobre la autenticidad de la firma del documento donde la trabajadora solicitó y obtuvo la devolución íntegra de su fondo de aportaciones, que fue firmado por dos testigos y del que la afiliada actora negó su autenticidad.

(ii) Que el Tribunal responsable negó de forma incoherente y parcial la admisión de la pericial tendente a demostrar la autenticidad de la firma, sin embargo establece en su resolución que no hubo controversias de hecho, lo que es falso, ya que fue combatido en el amparo (por el desechamiento de la prueba) y quedó establecida en la confesional de la actora. Luego, que se trata de un acto que trascendió al resultado del juicio, que fue ilegal y que no fue consentido, al impugnarse en amparo indirecto, para preparar el recurso en este amparo directo, como consta en actuaciones del juicio laboral.



## SEGUNDO CONCEPTO DE VIOLACIÓN

(iii) Que no existe obligación del Instituto quejoso de reintegrar fondos de aportaciones que fueron retirados voluntariamente por la afiliada hace treinta y tres años.

(iv) Que la devolución de aportaciones es incompatible con la existencia de derechos pensionarios, y que los fondos de pensiones no son ahorros a la vista que se pueden retirar y reintegrar cuantas veces lo desee el arbitrio del trabajador.

(v) Que los fondos son patrimonio del Instituto quejoso y no de los trabajadores, conforme al artículo 84 de la Ley de Pensiones vigente.

(vi) Que la devolución de las aportaciones sí tiene previstas consecuencias legales en relación a la pérdida de derechos, como lo establece el artículo 33 de la Ley de Pensiones de 1987 que expresamente señala que el afiliado pierde tres cuarta partes de sus derechos pensionarios, además, de que jamás establece que podrá restituir el fondo y recuperar esos derechos.

(vii) Que por su parte el artículo 78 de la Ley pensionaria publicada en 1978 señala que el afiliado que

cause baja y opte por retiro de sus aportaciones, conservará sus derechos de pensión hasta por la quinta parte del tiempo total que hubiese contribuido al fondo de pensiones.

(viii) Que tanto el ordenamiento de 1987 como de 1978 son claros en establecer que la devolución de fondos decrece sustancial e irreversiblemente los derechos pensionarios.

(ix) Que el Instituto quejoso no está facultado para recibir las aportaciones de los afiliados, en virtud de que no hay norma que así lo establezca. Además que no es en el fondo la recepción de aportaciones de hace treinta y tres años, sino el reconocimiento de antigüedad perdida por la devolución acaecida en ese período.

En ese sentido se tiene que, el Instituto quejoso no ataca todas las consideraciones vertidas por el Tribunal responsable en el laudo reclamado ni tampoco los fundamentos torales del fallo reclamado, toda vez que, como se advierte del primer concepto de violación el Instituto quejoso se limita a señalar que en el juicio laboral de origen existió controversia de hecho sobre la







autenticidad de la firma del documento donde la trabajadora solicitó y obtuvo la devolución íntegra de su fondo de aportaciones y que la responsable negó de forma parcial la pericial que ofertó la hoy quejosa en el juicio obrero natural.

Sin embargo, no ataca de manera frontal y directa los razonamientos por los cuales la responsable no admitió la pericial que el Instituto ofreció en la audiencia de siete de marzo de dos mil doce y que el Tribunal responsable rechazó en diversa audiencia de ocho del mismo mes y año en cita; el impetrante no desvirtúa ni destruye en su demanda de amparo absolutamente nada en relación a la negativa de admitir la referida prueba, recuérdese que la responsable señaló que no admitía la pericial en materia caligráfica y grafoscópica en razón de que no fue ofertada oportunamente por el Instituto, toda vez que, no se propuso al momento de ofertar la documental número 4 del escrito de pruebas del Instituto.

Asimismo, el Tribunal responsable declaró que si bien es cierto que el Instituto demandado ofreció medio de perfeccionamiento consistente en la ratificación de

firma y contenido del documento (solicitud y recepción de aportaciones) a cargo de la actora, asimismo debió ofrecer en ese momento, para el caso de que la actora no reconociera suya la firma contenida en dicha documental, la prueba pericial, lo que no aconteció, y en consecuencia se le tuvo por ofertada fuera de tiempo dicha probanza, conforme al artículo 880, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo.

En relación a las anteriores consideraciones por las cuales el Tribunal responsable no admitió la prueba pericial, la quejosa no manifiesta ni combate nada, solo se limita ante dicha supuesta violación procesal alegada en su demanda de amparo, a manifestar que la responsable fue parcial en negar su admisión, no obstante haber controversia sobre la autenticidad de la firma. Razonamientos que por sí solos resultan insuficientes para la concesión del amparo, toda vez que, no desvirtúan en modo alguno los razonamientos utilizados por el *A quo* para rechazar la admisión del medio probatorio en comento.





Así pues, el acreditamiento de la violación procesal por parte de la quejosa consistente en la no admisión de la prueba pericial por la responsable, resultaba transcendente en apoyo de sus demás conceptos de violación, toda vez que, en lo sucesivo de su demanda de amparo alega que el actor del juicio laboral de origen no tiene derecho a reintegrar sus aportaciones para con el Instituto, en virtud de que, dichas aportaciones ya habían sido devueltas a la actora (pagadas) con base al recibo original de dieciséis de julio de 1979. Sin embargo, al girar sus razonamientos en torno a que las aportaciones ya habían sido devueltas a la actora, por lo que no procedía el reintegro de las mismas, luego, al negar la actora en la confesional a su cargo esas afirmaciones, como también desconocer el contenido de dicho recibo y no ratificar su firma como la estampada en esa documental, es diáfano que la pericial era el medio de convicción idóneo para revertir la negativa de la actora.

No obstante lo anterior, la quejosa al hacer valer conceptos de violación que fueron omisos a controvertir



los razonamientos de la responsable respecto de la negativa de admisión de la pericial, es inconcuso que sus demás razonamientos devienen inoperantes, pues ellos tienen sustento en la medida de ser cierto que la actora trabajadora haya recibido sus aportaciones, cuestión que no fue dilucidada en el juicio laboral por no ser demostrada por la demandada con la prueba idónea, que en este caso, era la pericial que no le fue admitida, y que en el juicio constitucional, por ser el momento procesal oportuno, no desvirtuó.

Por otro lado, la quejosa tampoco combate las consideraciones del laudo recurrido, que fueron tomadas en cuenta por la responsable para nulificar el oficio DP/132/2010, como lo fue que se emitió por autoridad incompetente, esto es, por el Director de Prestaciones del [REDACTED], cuando señaló en el laudo reclamado que el competente era el Consejo Directivo del referido Instituto, **a lo que tampoco la quejosa nada adujo en su demanda.**

Basta observar que de la demanda del juicio laboral, una de las acciones principales es la nulidad del oficio

CUARTO TRIBUNAL  
EN MATERIA DE  
DEL TERCER  
CIRCUITO



mencionado por carecer de fundamentación y motivación, así como el reclamo de ser emitido por autoridad no facultada para ello, siendo esto parte de las consideraciones del laudo reclamado, y que el quejoso fue también omiso en combatir.

Tampoco el impetrante manifestó nada en relación a lo declarado en el laudo reclamado en el sentido de que debería turnarse al Consejo Directivo del Instituto quejoso la solicitud de reintegro de aportaciones formulada por la actora.

Así también, basta analizar el laudo reclamado, para percatarse de que el mismo también estableció que es el Consejo Directivo del [REDACTED] quien debe resolver la petición de la actora hoy tercero perjudicada, respecto del reintegro de sus aportaciones, **a lo que tampoco nada dijo la parte quejosa.**

En este contexto, es claro que la quejosa no controvierte todas las consideraciones y fundamentos torales del fallo reclamado, cuando, por sí solos, sustentan el sentido de aquél, por lo que al no haberse controvertido y, por ende, no demostrarse su ilegalidad,

éstos continúan rigiendo el sentido de la resolución combatida en el juicio constitucional. De ahí que los conceptos de violación resulten inoperantes por insuficientes, pues aun de resultar fundados no podrían conducir a conceder la protección constitucional solicitada.

Cobra aplicación la jurisprudencia IV.3o.A. J/4, cuyo criterio jurídico se comparte, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en la página 1138, del Tomo XXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de abril de 2005, Novena Época, materia común, cuyo rubro y texto dicen lo siguiente:

***“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES POR INSUFICIENTES SI NO ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL SENTIDO DE LA SENTENCIA COMBATIDA. Resultan inoperantes los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo directo que no controvierten todas las***





*consideraciones y fundamentos torales del fallo reclamado, cuando, por sí solos, pueden sustentar el sentido de aquél, por lo que al no haberse controvertido y, por ende, no demostrarse su ilegalidad, éstos continúan rigiendo el sentido de la resolución combatida en el juicio constitucional. De ahí que los conceptos de violación resulten inoperantes por insuficientes, pues aun de resultar fundados no podrían conducir a conceder la protección constitucional solicitada”.*

Y también resulta aplicable la jurisprudencia V.2o. J/49, cuyo criterio jurídico se comparte, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 89, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 61, Enero de 1993, Octava Época, materia común, registro 217455, cuyo rubro y texto dicen lo siguiente:

**“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES.**

*Si los conceptos de violación que hace valer el patrón quejoso, no combaten las consideraciones*

***que rige el sentido del laudo reclamado, dichos conceptos resultan inoperantes”.***

Finalmente, en cuanto al pedimento número 42, formulado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano colegiado, deberá estarse a lo resuelto en este fallo; ello, desde luego, con entera independencia de que no resulte necesario pronunciarse expresamente al respecto, en términos de la siguiente tesis que se comparte, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, octubre de mil novecientos noventa y cinco, página 576, Novena Época, cuyo sumario es el siguiente:

***“MINISTERIO PÚBLICO. SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO. El juzgador constitucional no está obligado en la sentencia que pronuncia, a acoger el sentido del pedimento del Ministerio Público, toda vez que conforme al artículo 5° de la Ley de Amparo, la representación social es parte en el juicio de garantías, por lo que tal pedimento constituye sólo una manifestación sujeta a la***



*apreciación que del acto reclamado se haga en la propia sentencia, como lo establece el artículo 78 de la misma Ley Reglamentaria”.*

Por lo expuesto, fundado y de conformidad en los artículos 76, 77, 78, 158 y 190 de la Ley de Amparo, se

III

**RESUELVE**

**ÚNICO.** La Justicia de la Unión **no ampara ni protege al** [REDACTED]

en contra de la autoridad y por el acto reclamado que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria, por las razones precisados en el último considerando de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución háganse las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno; con testimonio de esta ejecutoria, vuelvan los autos respectivos a su lugar de origen; y en su oportunidad, archívese el expediente, el cual se clasifica como **depurable** en cumplimiento a lo previsto en la fracción **III**, del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 2/2009, del Pleno de la Suprema Corte





de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.

Así, por **unanimidad** de votos, lo resolvió el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que integran los magistrados José de Jesús López Arias, Miguel Lobato Martínez y Armando Ernesto Pérez Hurtado, siendo presidente y ponente el primero de los nombrados, quien firma con el Secretario de Acuerdos, que autoriza y da fe; de conformidad con el numeral 188 de la Ley de Amparo, hoy ocho de marzo de dos mil trece, en que se terminó de engrosar.

**EL PRESIDENTE Y PONENTE.**

**MAGISTRADO JOSÉ DE JESÚS LÓPEZ ARIAS.**

**EL SECRETARIO DE ACUERDOS.**

**LIC. OSCAR IGNACIO BLANCO ARVIZU.**

Cotejó: Lic. Gabriel Arévalo Mascareño.

Esta hoja es la última de la resolución dictada en el juicio de amparo directo 43/2013, promovido por el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, en donde este Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, en sesión de siete de marzo de dos mil trece, determinó, por unanimidad de votos, negar el amparo y protección de la justicia federal solicitadas. Conste. Doy fe.

M'JJLA/GAM/agar.